

El Consejo Escolar cuestiona la sanciones por violencia

El presidente de la entidad señala en el Parlamento que alumnos y profesores dicen que son ineficaces

EFE

Pamplona

El presidente del Consejo Escolar de Navarra, Aitor Etxarte, cuestionó ayer la continuidad del actual sistema de sanciones para corregir las transgresiones en las aulas, dada la ineficacia que reconocen tanto alumnos como profesores. En una comparecencia en el Parlamento foral para explicar la última memoria de Consejo Escolar de Navarra, trasladó la situación de convivencia en los centros escolares y los problemas derivados para los docentes, tras detectarse el aumento de agresiones.

Sin trasladar cifras, aunque en el contexto de la comparecencia se señaló que en el curso 2017-18 se han denunciado 178 agresiones a docentes -el doble que el curso anterior-, constató que “el fenómeno de la agresividad no es específico del ámbito educativo y es un problema multifactorial”, por lo que “no es posible respuesta única”.

Reconoció que la profesión docente tiene “muchas fuentes de tensión, y el alumnado es solo una”, que se une a las procedentes de la Administración, las familias y los centros. Como “indicador negativo” reconoció la “evidencia” de la “escasa autoridad del profesorado y el insuficiente reconocimiento de su labor por parte del alumnado y sus familias”, de forma que “la autoridad moral no depende solo del colectivo” docente.



Aitor Etxarte.

Todo ello se recoge en un estudio del Observatorio Estatal de Convivencia en Educación Secundaria Obligatoria que se cierra con tres conclusiones, la de que la convivencia escolar en general es “buena o muy buena en el sistema educativo”, que la violencia existente en el resto de la sociedad también se expresa en la escuela, y que hay que “incrementar y extender” a todos los agentes educativos las medidas puestas en marcha.

Este estudio asegura que en general la calidad de la relación entre profesorado y alumnado en general “se valora de manera muy elevada”, al igual que la existente entre los propios docentes, de forma que el 83 % del profesorado dice contar con ayuda de sus compañeros en situaciones de peligro, inseguridad o duda.

Sí que subrayó como “obstáculos para la convivencia” dos puntos concretos, “la falta de disciplina e implicación de las familias” y

la “ineficacia de las sanciones empleadas para corregir las transgresiones”, una “opinión mayoritaria entre docentes y alumnado” ante e que ha instado a “una reflexión, porque si es ineficaz no tiene sentido insistir” en ello.

También advirtió sobre la relación del uso de las TIC con las agresiones verbales, y perfiló que entre los acosadores predominan los hombres y las mujeres entre las víctimas, y que entre el alumnado que participa en agresiones destaca que “siempre” son alumnos procedentes de “diversidad, complejidad, fracaso escolar y desestructuración familiar”.

En el turno de los grupos, Javier García (PPN) constató que las explicaciones de Etxarte confirman el aumento de las agresiones a docentes en las aulas y ante los que ha planteado una posible ley. Alberto Catalán (UPN) defendió la participación “de toda la comunidad educativa” en cualquier abordaje del problema, en el que ha acusado a la Administración foral de estar “obviando a las familias”.

Por EH Bildu, Miren Aranoa, consideró “inaceptable” que se intente “magnificar este tema tan sensible, preocupante y doloroso de manera irresponsable”.

El portavoz del PSN, Carlos Gimeno, muy claro en su rechazo a una posible ley que regule el problema, advirtió que las bajas de profesores también se dan “por abusos de autoridad y por tratos vejatorios”, y apostó por la “incorporación decidida” de las familias a la solución del problema. Marisa de Simón (IE) reconoció que “la escasa autoridad del profesorado no se arregla con una ley que otorgue al profesor la condición de autoridad pública”.